

Pensar la violencia a contracorriente

A finales del mes de mayo pasado, se llevó a cabo el XXXIII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus siglas en inglés). Los ejes temáticos articuladores del encuentro fueron tres: precariedades, exclusiones y emergencias. La agenda del congreso hacía esperable que el caso salvadoreño asomara entre las numerosas presentaciones que caracterizan a estos eventos. A pesar del tamaño y la simultaneidad de las sesiones de encuentros como este, a las presentaciones a las que sí se pudo acudir arrojaron dos constataciones generales, más o menos esperables: la primera, que en la actualidad El Salvador constituye un caso de interés académico fundamentalmente por sus altos niveles de violencia, en buena medida gracias a las pandillas y debido a su situación de hacinamiento carcelario. Segundo, casi sin excepción, cada exponente que se refirió a la situación de violencia de “estos países” –El Salvador, México o el triángulo norte, por ejemplo– lo hizo como un observador externo a la realidad que investigaba. Se trata de investigadores o investigadoras que residen fuera del país, que luego de acercarse transitoriamente a realidades como la salvadoreña –todo hay que decirlo: algunos pisaron el terreno, corrieron algún riesgo, etc.– regresan y permanecen en la distancia y, por supuesto, contaron con apoyo institucional, becas o subvenciones (*grants*) que posibilitaron su trabajo.

No es una exageración afirmar que países como El Salvador constituyen verdaderos laboratorios sociales. Históricamente y en la actualidad, más allá de la tragedia, el caos o la indignación cotidianos, el país ofrece circunstancias extraordinarias que despiertan el apetito académico de cualquier “violentólogo”. Al menos desde principios del siglo XX, pasando por la guerra, hasta arribar a la vigente violencia social y sus diversas expresiones y procesos derivados (inseguridad, migración, erosión de legitimidad institucional, impunidad, etc.), el abanico de posibilidades investigativas que ofrece el fenómeno de la violencia puede ser abrumador. Pero en este mar de abundancia fenoménica y temática, y sobre todo de cara a una realidad cuyas lacerantes consecuencias deberían impeler a ser objeto de constante reflexión, tampoco es exagerado afirmar que las “posibilidades de pesca” no están a favor de los potenciales investigadores e investigadoras locales. El estudio de la violencia no escapa a esas lógicas globales que permiten a otros mejor apercibidos usufructuar recursos locales desde fuera. La llamada “comunidad” científica o académica existe, en buena medida, gracias a la ilusión de homogeneidad que permiten las licencias del lenguaje. De lo contrario, no existiría una academia dominante (o *mainstream*) y una academia subalterna, más bien pendiente –cuando lo está– de lo que se produce y se dice fuera.

La educación universitaria siempre se ve condicionada por los avatares históricos en los que busca desarrollar su quehacer.

Las razones actuales de esta situación desfavorable para el estudio local de la violencia conforman una intrincada y variopinta madeja de circunstancias. Al menos tres grandes factores serían los que hoy conspiran contra el estudio sistemático local de la violencia. En primer lugar, *el debilitamiento de la tradición investigativa universitaria* en relación al tema.

Es posible identificar hitos que nos confirman que, al menos en las últimas décadas, la universidad salvadoreña ha ido a peor en su capacidad para acercarse y teorizar sobre la violencia. El emblema inaugural de este menoscabo gradual podría cifrarse, en buena medida, en el asesinato de los jesuitas de la UCA. Por supuesto, la represión generalizada o el asesinato de profesores y estudiantes universitarios antes y durante la guerra nunca fue precisamente un estímulo para la investigación universitaria del país. Pero menos lo fue dar muerte a un grupo irreplicable de personas entre quienes destacaban algunos intelectuales y académicos que, además de demostrar un inquebrantable compromiso con una realidad trágica, reflexionaban constantemente desde la circunstancia misma, les asistía una manifiesta y amplísima erudición académica, y contaban con los medios para investigar sobre la violencia de entonces. La gravedad del hecho aumenta, en el contexto de la discusión que nos ocupa, si consideramos que son precisamente este tipo de académicos y no cualquier otro el que cuenta con la capacidad real de generar alguna escuela.

Indagar, cuestionar, construir, pensar y apropiarse de las herramientas que se requieren para ello –donde cabe incluir el goce intelectual que conlleva conocer– implica un arduo y constante trabajo de aprendizaje. Pero ¿cómo aprender tales disposiciones ante la ausencia de una cultura de investigación estable sobre la violencia (y sobre otros temas sociales también)? Se trata de una espiral viciosa al interior de los recintos universitarios que, entre otras cosas, se manifiesta y reproduce a través de la ausencia o la migración hacia el exterior de cuadros académicos calificados para la investigación, o la dificultad misma para alcanzar tales calificaciones. Se añade la falta de este tipo de modelos en las aulas, de estímulos y de formación del profesorado y del estudiantado en tales menesteres; la ostensible debilidad de los cursos y procesos de investigación en grados y postgrados; la sobrecarga de tareas en los docentes, lo cual convierte la investigación en una actividad marginal, entre otras que copan el malabarismo cotidiano de lo urgente; la manifiesta resistencia para la colaboración y la aproximación multidisciplinaria a los fenómenos. No se puede dejar de mencionar la dificultad añadida del género cuando las investigadoras quieren decir algo por encima del ensordecedor ruido de la jornada múltiple y el criterio masculino que prevalece en el mundo de la investigación social. Así, se termina investigando a pesar de las universidades y no gracias a ella. En tales circunstancias, la violencia, como muchos otros fenómenos de la realidad, avanza a zancadas y el rezaño de quien pretende comprenderla corre el riesgo de ser insalvable.

Sin embargo, a pesar de lo dicho antes, sería injusto si no se dijera también que la universidad salvadoreña nunca la ha tenido fácil, y menos fácil

la tiene en la actualidad. La educación universitaria siempre se ve condicionada por los avatares históricos en los que busca desarrollar su quehacer. Al escarmiento en forma de represión propia de la guerra, cabe añadir hoy que las universidades nacionales no cuentan con apoyo estatal y que por lo general funcionan como archipiélagos, como islotes donde rara vez existe comunicación entre ellas. Las universidades nacionales, como los “gremios” profesionales, acusan una ostensible y crónica fragmentación organizativa. Asimismo, no solo en El Salvador, sino en todo el mundo, la entrada del neoliberalismo también tiene sus repercusiones en la educación superior. Después de todo, el neoliberalismo no es un sistema de ideas abstractas, sino un cincel de prácticas e idearios socioeconómicos muy definidos. Un claro ejemplo de lo que aquí se habla lo constituye la devaluación de campos humanísticos a materias subsidiarias, o la desaparición de campos académicos enteros cuya razón de ser es “pensar” la sociedad (ej.: Sociología) en favor de la proliferación de carreras de corte económico o técnico que, según la demanda del mercado y el imaginario colectivo, auguran un futuro más lucrativo (ej.: *marketing*, informática, administración de negocios, etc.).

En un país donde la educación superior es un privilegio y donde desde siempre un grado universitario ha servido instrumentalmente como vehículo de movilización social, la investigación y la reflexión no suelen considerarse prioridades o un capital que pueda traducirse en ganancias mediatas, ni para quien estudia ni para quien eventualmente contrata. Tampoco es fácil para la universidad crecer en su capacidad investigativa inmersa en una cultura tan autoritaria e ignorante de lo que conlleva investigar. Cuestionar la realidad siempre ha sido una “acción subversiva” ahí donde el sistema social como un todo pervive gracias a la argucia y al silencio cómplice o impuesto. Revelar causas, transparentar procedimientos, exponerse al escrutinio público y dejarse cuestionar, prepararse para estar equivocado, abrazar el debate y el conflicto como oportunidad de construcción de consenso y de crecimiento mutuo (y no de aniquilación, como hace la violencia), son algunas de las facetas que la cultura de la investigación supone y que se comprende que no sean bien vistas en un medio como el salvadoreño. La ignorancia sobre la investigación y sus implicaciones, fruto podrido de algunas de las dinámicas revisadas antes y quizá como síntesis de todas ellas, explicarían el usual portazo en la cara que la política suele dar a la práctica de la investigación, pues esta debe tener sangre fría y decir la cosas con base en la reflexión sustentada y la evidencia y no atendiendo a conveniencias particulares, aun si eso merma votos o popularidades, incordia a los mercados o a grupos acostumbrados a tener la razón a la fuerza. También suele ser frecuente la inviabilidad de las propuestas de investigación solicitadas, por los presupuestos exigüos que se proponen o la restringida y apurada agenda de las agencias de cooperación. Las dinámicas descritas ayudan a comprender por qué la figura del intelectual o el académico ha mutado –en un exacerbado sentido entomológico kafkiano– en “expertos” y “consultores”, quienes producen mucho del mar de datos y de informes que nos circundan periódicamente. Este punto nos introduce al segundo factor que afecta la investigación local de la violencia.

Quien investiga la violencia desde aquí y permanece aquí no puede tomar distancia de la violencia como objeto de estudio.

El segundo factor puede definirse como *la compulsión contabilizadora de la violencia*. Es decir, el generalizado y persistente afán social de confundir el recuento con la explicación del fenómeno. Como un corolario de los altos niveles de violencia que sufre el país, mucha de la energía de la sociedad se dilapida contando la violencia, sus manifestaciones y sus consecuencias. Las implicaciones de saber la cantidad de muertos diarios, las tasas de homicidios mensuales, que según UNICEF El Salvador es el país del mundo en el que más niños y niñas son asesinados o que según el índice de Paz Global del 2015 se ha vuelto a ocupar el puesto del país más violento de Centroamérica y del Caribe son profundas y complejas.

Los datos deben ser reconocidos y no se puede comprender un fenómeno sin atender a sus manifestaciones, sus oscilaciones, sus movimientos demostrables. Pero los números no equivalen automáticamente a conceptos, las estadísticas no son teoría, como el crimen es distinto de la criminalidad. Nutrida de fuentes oficiales, mediáticas, organismos internacionales y universidades, la violencia en el país se verifica con cifras. Pero la plétora de números, paradójicamente, parece ofrecernos la ilusión de que sabemos de qué hablamos mientras llenamos nuestra ignorancia de fondo con interminables y autocomplacientes conteos. Una cultura investigativa de corte descriptivo ha consolidado el interés por observatorios, frecuencias y tablas de encuestas e informes, en detrimento de la formulación de hipótesis teóricas, de la inferencia y de la construcción conceptual propia de una cultura investigativa teórica. Después, no es extraño que las opiniones, los programas de intervención o de prevención se nutran y constituyan el enésimo palo de ciego o que, en el mejor de los casos, eleven el sentido común –lectura de biblias en las escuelas, marchas por la paz, inauguraciones a granel de canchas deportivas– a la categoría de política pública o de actos fundacionales de una supuesta y rimbombante “cultura de paz”.

El tercer y último factor del que debe dejarse constancia es de corte epistemológico: *el carácter oscurantista de la misma violencia*. Junto con las dificultades internas y externas que experimenta la universidad, más la glorificación del número sobre los conceptos y los significados, la violencia por sí misma también crea anticuerpos, “ofrece resistencia” a ser investigada. No se trata únicamente de la dificultad normal de todo fenómeno complejo de poner a prueba la eficacia representacional de quien lo piensa. De lo que se trata es de reconocer que en ámbitos sociales signados por la violencia crónica, la distancia del observador respecto al objeto que observa se ve vulnerada, a veces hasta colapsarse entre sí; que a la complejidad inherente de pensar la violencia hay que añadir la opacidad del sistema en el que aquella prolifera; que los actores sociales que la perpetúan llegan a clausurar la interlocución social por la defensa de intereses varios o que, sencillamente, la indagación sobre el tema se ha convertido en un ejercicio tan peligroso que la vida llega a ponerse en juego.

Quien investiga la violencia desde aquí y permanece aquí no puede tomar distancia de la violencia como objeto de estudio. Por el contrario, se da de bruces con ella: se reflexiona desde el miedo, la recurrente indignación, las camaleónicas cifras (cuando se tiene acceso a ellas), la frustración por la falta de recursos y el constante acecho del cuestionamiento de si al final el esfuerzo vale la pena, al sopesar los sacrificios que conlleva investigar en tales circunstancias. La oscuridad del sistema se constata a todos los niveles. En coreografías oficiales que oscilan entre el triunfalismo, la condena o el silencio; en la censura y el posible despido del académico que ejerce la crítica (como ocurriera recién a un sociólogo en una universidad privada); la amedrentada resistencia de las escuelas y de los mismos estudiantes a conversar sobre la cotidianeidad de su jornada, la hermetismo de las cárceles y de las pandillas, el mutismo precautorio de las personas en las comunidades y en las calles. Algo nos dice la violencia acerca de sí misma –y del país como contexto de sentido– cuando al pretender investigarla se oscila entre la imposibilidad, la quijotada, el soliloquio y la actividad de riesgo.

Una tregua para pensar

Los trabajos incluidos en este número monográfico pueden ser enmarcados en dos treguas: la una, la que suspende temporalmente o al menos contrarresta algunos de los escollos mencionados antes, al ofrecer a un grupo de investigadores y de investigadoras jóvenes y con distintos antecedentes académicos, un espacio y recursos para adentrarse en el estudio de ciertas facetas de la violencia. Los trabajos que aquí se reúnen fueron desarrollados en el marco del proyecto denominado “Investigación sobre Violencia y Desarrollo”, iniciativa que fue puesta en marcha por el Instituto de Investigación Interdisciplinaria sobre Conflicto y Violencia (IKG: www.uni-bielefeld.de/ikg/) y su proyecto del Centro Internacional para la Investigación de la Violencia (ICVR, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Bielefeld, Alemania. El proyecto, a su vez, fue posible gracias al importante respaldo del Ministerio Federal Alemán para la Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ).

Con el afán de visibilizar la realidad de la violencia y de fortalecer capacidades locales del llamado “Sur global”, el proyecto ensambló una red de investigadores y de investigadoras de Egipto, El Salvador, Pakistán, Perú y Alemania. El proyecto tuvo lugar, aproximadamente, entre el mes de noviembre de 2013 y febrero de 2015: entre la puesta en marcha del proyecto –que incluyó, entre otras cosas, seminarios, intercambios, disponibilidad de recursos bibliográficos, asesorías y visitas a los distintos países–, la realización de las investigaciones locales y la publicación en línea de la mayoría de ellas (disponibles en inglés en el sitio del ICVR). Como parte del desarrollo de capacidades y de la conformación de redes académicas en el ámbito local, algunos docentes investigadores del Departamento de Comunicación y de Cultura y del Departamento de Psicología y de Salud Pública de la UCA fungieron como supervisores y enlaces de los proyectos locales. Todas las investigaciones de los distintos países se articularon en torno a líneas de investigación definidas, las cuales en su mayoría aparecen reflejadas en los trabajos que aquí han sido compilados.

Si, hace dos décadas, quienes toman las decisiones hubieran considerado las primeras investigaciones sobre pandillas, quizá el fenómeno podría haber sido, al menos, contenido.

El trabajo de Marlon Hernández como el de William Carballo se sitúan en la tensión del refinamiento perverso que la tregua permitió a las pandillas para –quizá– mostrarse o consolidarse como actores políticos y como actores de seguridad pública. El trabajo de José Salguero contrasta el efecto y la percepción de medidas no represivas y de corte inclusivo en dos ciudades salvadoreñas disímiles en los niveles de violencia que experimentan, a pesar de las semejanzas de infraestructura y socioeconómicas que las asemejan. El trabajo de Noemy Molina ofrece un acercamiento a la violencia que experimentan las mujeres en comunidades donde las pandillas modulan la convivencia cotidiana y la resolución de conflictos. Las investigaciones salvadoreñas se ven completadas y complementadas con el trabajo de Sharon Gorenstein, investigadora peruana que, dando cuenta de una faceta también verificable en el medio salvadoreño, explica cómo, en la región de Ayacucho, las instituciones llamadas a proteger a la mujer de la violencia doméstica terminan legitimando la misma a través de sus representantes y sus procedimientos al reproducir valores tradicionales y patriarcales.

La segunda tregua en que estos trabajos se enmarcan es, por otra parte, una de orden coyuntural: la llamada tregua entre pandillas. Parte del mérito de los trabajos locales que aquí se presentan es haber llevado a cabo un proceso reflexivo mientras la tregua entre pandillas estuvo vigente¹. Después de todo, la historia rara vez permite estar en el momento y a la hora adecuados, y menos reflexionar en momentos excepcionales y fugaces de su desarrollo. Todos los trabajos fueron llevados a cabo con base en metodologías cualitativas, lo que, además de romper con la inercia positivista del estudio de la violencia, significa que los trabajos que aquí se presentan son en buena medida el fruto de procesos de reflexión surgidos de la observación en el terreno y a partir de las voces de personas de distinta condición a quienes la violencia afecta o concierne de diferentes formas. Las investigaciones ofrecen confirmaciones, así como elementos para formular inquietudes futuras. En su carácter simultáneamente exploratorio, descriptivo y novel, radican tanto su valor como sus limitaciones.

Precisamente en el vaivén de las posibilidades y las limitaciones, se desarrolla el reto añejo y formidable de investigar la violencia en países como El Salvador. Ya en 1990, en el prólogo del libro *Psicología Social de la Guerra*, Ignacio Martín-Baró reconocía la falta de preparación de la psicología de entonces, la inercia de las tareas tradicionales, la carencia de recursos y de ideas, así como la necesidad de reinventarse, para comprender la violencia de la guerra y sus consecuencias. Años después, en 1997, un emblemático número monográfico sobre violencia en esta misma revista iniciaba subrayando el problema de adentrarse en el fenómeno de la violencia social ante la ausencia de datos confiables. En 2005, en la apertura del libro compilatorio *Psicología Social de la Posguerra*, se vierten reflexiones sobre el impacto

1. La vigencia de la tregua entre pandillas se habría producido entre marzo de 2012 y finales de 2014.

que tuvo la muerte de Ignacio Martín-Baró de cara al avance de la psicología social y de la investigación de temas perentorios para la realidad salvadoreña. Justamente, durante la presentación pública de este último libro, la palabra fue cedida a una de las personas asistentes, que inquirió: “¿Por qué tardaron tanto (en publicarlo)?”. La pregunta fue un reclamo atemporal, tan comprensible como injusto. Comprensible porque existe una necesidad real de producción científica, de respuestas, y porque una academia y una universidad que no escribe o no investiga corre el riesgo de desfigurar su rostro hasta volverlo irreconocible al desnaturalizar y devaluar mucho de su razón de ser.

Si, hace dos décadas, por ejemplo, quienes toman las decisiones hubieran considerado las primeras investigaciones sobre pandillas, quizá el fenómeno podría haber sido, al menos, contenido. Miles de personas muertas después, luego de tantas biografías truncadas, economías arruinadas, exilios súbitos, instituciones mermadas y la confirmación de la incombustible y fría insensatez política de implementar medidas represivas primero y concesivas después, el resto de investigaciones subsecuentes sobre el tema solo fue confirmando ante nuestros ojos que el cachorro devenía en fiera, en una verdadera hidra de muchas cabezas. Por ejemplos como estos, la pregunta fue y es comprensible. De lo injusto de la pregunta es de lo que se han ocupado las reflexiones previas.